



NACIONES UNIDAS  
REPÚBLICA DOMINICANA  
.....



COVID-19  
RESPUESTA

República Dominicana

---

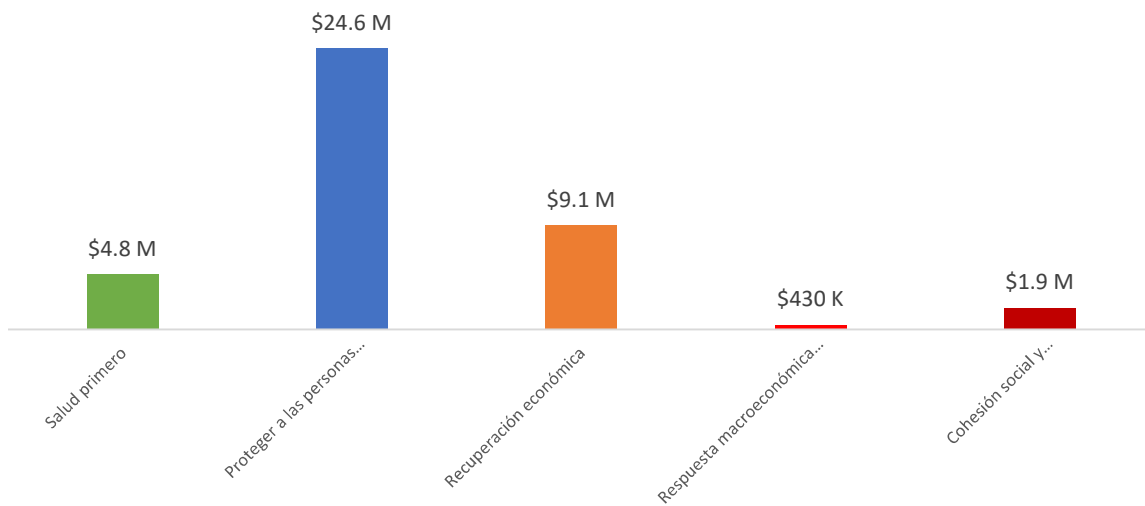
# Plan estratégico de respuesta a COVID-19



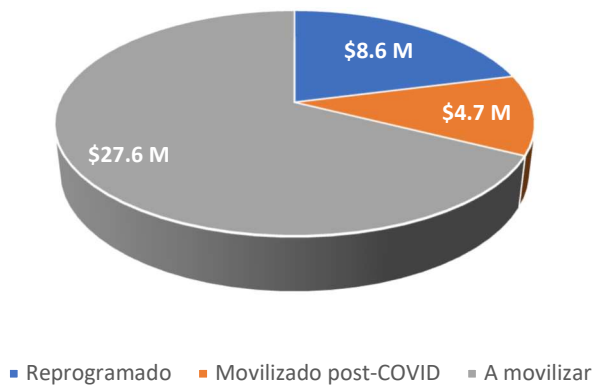
## Las cifras clave



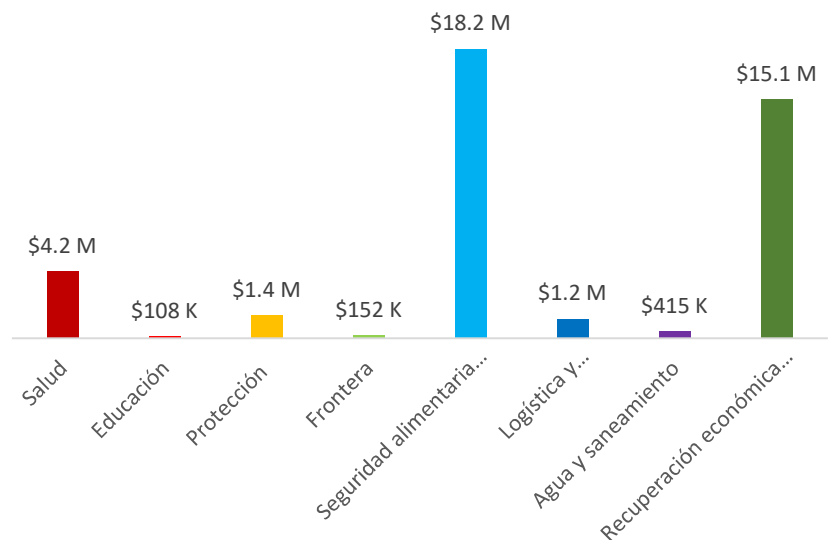
### Presupuesto por pilar del marco socioeconómico (en US\$)



### Presupuesto reprogramado, movilizado y pendiente a movilizar (en US\$)



### Presupuesto por sector (en US\$)



# Índice de contenidos

<b>1. Resumen ejecutivo</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Análisis de la situación y de necesidades</b> .....	<b>6</b>
2.1 Impacto de la epidemia en materia de Salud Pública y en los servicios de salud .....	6
2.2. Impacto en las familias y las personas más vulnerables por la limitación de acceso a bienes y servicios .....	7
Sistema de Protección Social.....	9
Educación e infancia.....	9
Protección .....	10
Seguridad alimentaria y nutricional .....	10
Agua, saneamiento e higiene .....	11
2.3 El impacto económico de la crisis.....	12
Análisis macroeconómico.....	12
Análisis sectorial o mesoeconómico .....	13
Análisis microeconómico .....	14
<b>3. Una oportunidad para construir un futuro mejor</b> .....	<b>15</b>
<b>4. Una estrategia integrada</b> .....	<b>16</b>
<b>5. Los pilares de la respuesta y recuperación socioeconómicas en República Dominicana</b> .....	<b>18</b>
I. SALUD PRIMERO .....	18
II. PROTEGER A LAS PERSONAS.....	19
III. RECUPERACIÓN ECONOMICA .....	20
IV. RESPUESTA MACROECONOMICA Y COLABORACION MULTILATERAL .....	21
V. COHESIÓN SOCIAL Y RESILIENCIA COMUNITARIA .....	22
<b>6. Aspectos transversales</b> .....	<b>23</b>
Comunicación y abogacía.....	23
Alianzas estratégicas y financiación para el desarrollo .....	23
Monitoreo del plan estratégico.....	24
<b>7. Mecanismos de coordinación de la respuesta</b> .....	<b>25</b>

# 1. Resumen ejecutivo

La pandemia COVID-19 es una emergencia de salud pública sin precedentes que está afectando profundamente a las sociedades y a las economías. Se espera que la pobreza y las desigualdades aumenten en todo el mundo, por lo que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se vuelve aún más urgente y central.

Aunque República Dominicana ha implementado una estrategia de contención de la epidemia contundente, aplicando medidas de salud pública apropiadas y a tiempo, el análisis de las curvas y datos epidemiológicos muestra que la propagación del virus se ha extendido a todo el país y que la situación es muy preocupante. Los recursos del país se están viendo reforzados, pero **existe un riesgo real de seguir sufriendo brotes importantes y de observar en algún momento la saturación del sistema de salud**, con graves consecuencias en pérdidas de vidas.

A los efectos directos de la pandemia se suman los causados por las medidas de cierre y confinamiento adoptadas para contener la epidemia, que han reducido drásticamente la actividad económica limitando el acceso de las personas a servicios básicos como la educación, la alimentación, los servicios de protección contra la violencia, servicios de justicia y los medios de vida de las familias. Así, **los efectos sociales y económicos están siendo devastadores** ya que se están exacerbando y profundizando las desigualdades preexistentes, dejando expuestas vulnerabilidades en los sistemas sociales, políticos, económicos y de biodiversidad, que a su vez amplifican las consecuencias de la pandemia.

En República Dominicana la actual crisis representa la posibilidad de una recesión severa con altos niveles de privaciones y desempleo que amenaza con incrementar la pobreza y las desigualdades, golpeando con mayor fuerza a los pobres, especialmente a las mujeres, los niños y las niñas. A pesar de los importantes avances en reducción de la pobreza, **en República Dominicana sigue habiendo un 63% de la población en las franjas de pobreza (21%) y vulnerabilidad (42%)**.

Así, y según estimaciones del PMA y CONASSAN, esta crisis provocará que la cifra de personas en inseguridad alimentaria moderada ascienda a 3.3 millones y la cifra de inseguridad alimentaria severa ascienda a más de 700,000 personas, que suponen un aumento del 58 y 550% en cada caso. Además, se prevé un aumento de la desnutrición aguda y deficiencias importantes en micronutrientes en niños y niñas menores de cinco años y en embarazadas.

**Esta crisis ha puesto a prueba el sistema de Protección Social**, que en los primeros meses ha podido expandir su cobertura para apoyar a 1.5 millones de familias dominicanas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la crisis también ha mostrado la necesidad de seguir fortaleciendo este sistema para que sea más resiliente e inclusivo, apoyando una mejor integración y uso de datos digitales y permitiendo mayor focalización y seguimiento de las ayudas. Igualmente, la crisis ha mostrado la necesidad de fortalecer la prestación de servicios básicos esenciales, como la asistencia de salud maternal, los programas de salud sexual reproductiva y los servicios destinados a víctimas de la violencia de género.

**Se están agravando las desigualdades de género ya existentes.** Según la CEPAL, República Dominicana es uno de los países en la región con más incidencia de feminicidios, estimándose que más de 1.795 mujeres han sido asesinadas desde 2010. Las medidas de confinamiento, de restricción de movimiento y el estrés ocasionado por la pérdida de medios de vida están teniendo repercusiones dramáticas en los hogares habiéndose registrado un aumento muy importante de denuncias y casos de violencia y abuso sexual. **Reforzar los servicios de prevención y atención a víctimas de violencia es por tanto una prioridad de la respuesta.**

La recuperación económica debe enfocarse en proteger el empleo y los trabajadores; garantizar el trabajo digno; y apoyar a la economía informal (54% del total de trabajadores), las MIPYMES y las cadenas de valor estratégicas para el país como el turismo, la construcción y las zonas francas. Pero debemos ir más allá; **esta recuperación es también una oportunidad** para transformar el aparato productivo acelerando el proceso de digitalización, apostando por la economía verde, incorporando prácticas empresariales inclusivas y construyendo sectores económicos más resilientes.

Para asegurar una respuesta adaptada a los grandes desafíos actuales es imprescindible que el Gobierno de la República Dominicana y todos los agentes de desarrollo **cuenten con herramientas analíticas capaces de arrojar evidencias firmes que guíen la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.** Así, el Sistema de Naciones Unidas, en su rol de asesoría técnica y acompañamiento al estado, ha apostado por apoyar el análisis continuo de la situación con el fin de que los resultados que se arrojen puedan orientar la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas adaptadas a la situación actual y que se prueben eficaces y costo/efectivas.

En el marco de esta crisis la respuesta inmediata debe emprenderse con la mirada puesta en el futuro ya que la trayectoria de desarrollo a largo plazo se verá afectada por las decisiones el país tome ahora y por el apoyo que reciba. De ello esto dependerá la capacidad del país de poder avanzar en sus indicadores socioeconómicos y lograr los objetivos de la Agenda 2030.

Este plan estratégico de respuesta incluye un análisis de las necesidades inmediatas observadas, así como del impacto socioeconómico de la crisis. Además, propone un paquete integrado de intervenciones para apoyar al gobierno a responder a las necesidades identificadas y a proteger los derechos de las personas afectadas por esta crisis y que atraviesan una situación difícil, poniendo especial atención en los grupos y personas más vulnerables que corren el riesgo de quedar atrás. **El Sistema de Naciones Unidas estima que necesita 40,8 millones de dólares para apoyar a la población y al Gobierno de la República Dominicana a responder y recuperarse de esta crisis.**

## 2. Análisis de la situación y de necesidades

Esta sección ofrece un análisis de la situación y diferencia tres ámbitos que están estrechamente relacionados entre sí y a su vez vinculados todos al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- El impacto en materia de salud pública, incluyendo la capacidad del sistema de salud para hacer frente a la emergencia sanitaria y el impacto resultado de una presión excesiva sobre los sistemas de salud y otros servicios esenciales.
- El impacto inmediato en las familias y en las personas como consecuencia de la falta o reducción del acceso a bienes y servicios tales como la educación, el agua, el saneamiento y la higiene, alimentación y medios de vida, protección contra la violencia, etc.
- El impacto de los efectos de la crisis en su dimensión económica, incluyendo los aspectos macroeconómicos, el empleo, el tejido empresarial, el turismo, el tejido y la cohesión social y la resiliencia de los más vulnerables.

### 2.1 Impacto de la epidemia en materia de Salud Pública y en los servicios de salud

COVID-19 se ha convertido en una pandemia de niveles sin precedentes. Hasta ahora, las tasas globales de mortalidad han sido superiores al 3 por ciento y considerablemente más altas para las personas mayores y las que tienen condiciones de salud subyacentes. El virus también está afectando la salud de los adultos más jóvenes.

Aunque el Gobierno de la República Dominicana ha tomado medidas de mitigación tempranas, la propagación del virus se ha extendido a prácticamente todo el país y el análisis de las curvas epidemiológicas y otros parámetros sugieren que aún existe un riesgo real de sufrir brotes importantes con graves consecuencias en pérdidas de vidas. Los recursos del país se están viendo reforzados, pero podrían ser insuficientes para atender la demanda agregada por el coronavirus al sistema de salud dominicano, generando un riesgo de saturación que podrían impactar de manera negativa en la atención a la población.

Además, la respuesta a la pandemia ha dado lugar a una disminución de otros servicios relacionados con la atención sanitaria preventiva y la atención prenatal, durante el parto y postnatal, además del tratamiento de otras patologías no relacionadas con el COVID-19.

República Dominicana es un país particularmente vulnerable en materia de salud pública, habiéndose identificado los riesgos siguientes:

- Las capacidades de respuesta del sistema de salud en proporción a la demanda a razón de la pandemia, principalmente en los servicios de alta complejidad, podrían ser insuficientes
- Existen limitaciones en los sistemas de vigilancia en salud pública provinciales, así como de la capacidad de laboratorio para responder a las acciones de investigación de casos, seguimiento de contactos y toma y procesamiento de muestras de forma masiva.
- Ha habido una reducción del personal de salud disponible debido a contagios de profesionales sanitarios
- Se ha observado un aumento de la morbilidad materna y neonatal, y en mujeres gestantes, particularmente las más vulnerables (migrantes, pobres) dado que encuentran mayores barreras para acceder al servicio de salud. Las embarazadas asisten con menor frecuencia a los servicios de salud ya sea por miedo al contagio o porque en algunos establecimientos de salud se ha suspendido la consulta prenatal y por la falta de información sobre las señales de alarma durante el embarazo muchas están llegando con complicaciones que pudieron haberse evitado, lo cual está ocasionando un aumento en el número de casos de muertes maternas en algunas regiones del país.
- Existen riesgos sobre la salud y la supervivencia de las personas debido a la disminución del tratamiento de otras patologías y disminución de la atención médica preventiva, servicios de salud sexual y reproductiva, atención pre / postnatal, anticoncepción, atención de VIH/SIDA y otras enfermedades crónicas, incluso atenciones que pueden ser de urgencia como las emergencias obstétricas, debido a la presión sobre los sistemas de salud que cuenta con recursos insuficientes para aumentar el personal, el espacio de atención médica y los suministros esenciales.

- Además, existen riesgos relacionados a la falta de acceso a servicios de agua y saneamiento en algunos lugares, las prácticas de higiene preexistentes y en general las condiciones de vida en algunos lugares, que son factores determinantes que aumentan la incidencia y la propagación del virus, y agravan los efectos en el estado de salud de las personas y la pérdida de vidas.

Las personas envejecientes, y en concreto aquellas que viven con enfermedades crónicas, son personas de alto riesgo. Los servicios de atención, chequeo y control médico regular para estas poblaciones se ven afectados como consecuencia de la sobrecarga de los sistemas de salud. Además, las medidas de distanciamiento social y restricción de movilidad dificultan la disponibilidad y el acceso oportuno a cuidado y apoyo familiar, social y psicológico. Las personas mayores pueden enfrentar múltiples barreras para acceder a atención médica de calidad, incluida la asequibilidad, la accesibilidad, la discriminación por edad y el estigma relacionado con la edad. Todo esto también varía según género, perfil socioeconómico, ingresos, preferencias sexuales, identidades de género, estatus migratorio y orígenes raciales o étnicos; por lo tanto, tales determinantes sociales del acceso a servicios relacionados con la salud deben ser tomados en consideración.

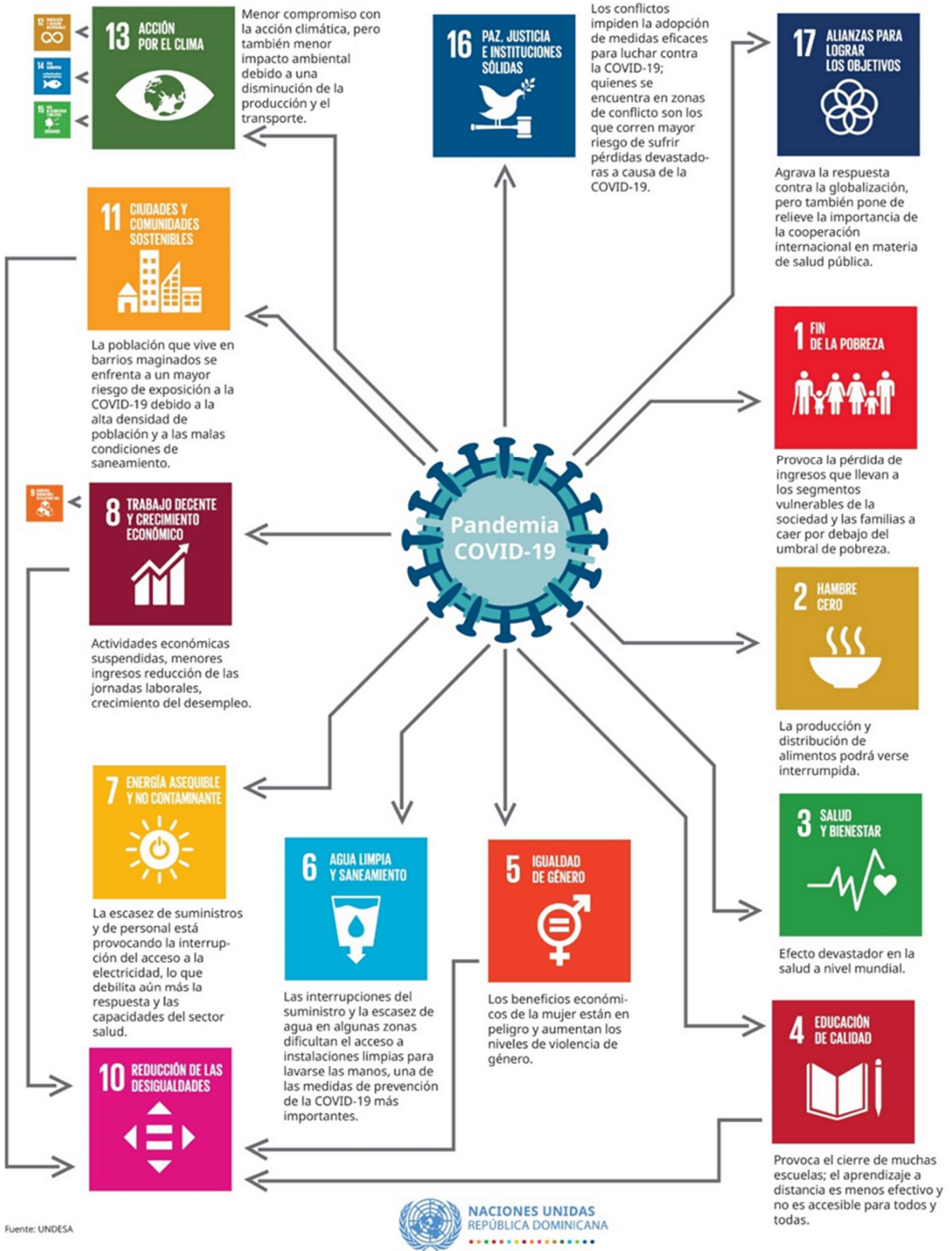
La población que vive con el VIH es también especialmente vulnerable y requiere que se asegure de forma rigurosa el tratamiento antirretroviral (ARV) para asegurar la supresión viral y la recuperación inmunológica, y reducir así el riesgo de complicaciones en caso de infección con COVID-19. Sin embargo, de las 71,985 personas que se estiman viven con VIH en República Dominicana, sólo el 48% están asegurando su tratamiento. 37,146 personas que viven con VIH no se están beneficiando de los medicamentos y por tanto sistema inmunológico está deprimido y se encuentran a alto riesgo de complicaciones si contraen la enfermedad.

## 2.2. Impacto en las familias y las personas más vulnerables por la limitación de acceso a bienes y servicios

Con el objetivo de mejorar la comprensión de cómo la crisis sanitaria y socioeconómica está afectando los hogares de las familias más vulnerables en las distintas dimensiones del desarrollo (salud, educación, alimentación, ingresos y medios de vida, entre otros), se ha puesto en marcha una iniciativa interagencial que permite tener información en tiempo real para guiar la respuesta y recuperación. **SEIA Red-Actúa es una herramienta digital de monitoreo ágil y en tiempo real sobre la situación en los hogares, que permite actuar directamente en las comunidades, mejorar las intervenciones y guiar su implementación.** La iniciativa cuenta con el apoyo del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno de la República Dominicana y con una red de 28 ONG distribuidas en todo el territorio nacional. SEIA-Red Actúa es una herramienta que, por lo innovador, **ha sido seleccionada como Práctica de Excelencia por el PNUD Global.**

La situación de crisis sanitaria y el efecto inmediato de la cuarentena y, por tanto, del cese de la actividad económica, del empleo y los medios de vida de muchas personas están produciendo situaciones de necesidad inmediata en ámbitos que van más allá de lo sanitario. La población vulnerable y, en particular, los más excluidos son los más afectados por la situación. Especialmente preocupante es la situación de las familias de los dos quintiles de menos ingresos, aquellos que viven en extrema pobreza, en particular las mujeres y niñas, los/as que no tienen acceso a identidad legal y están, por tanto, excluidos de los sistemas normales de transferencias en efectivo, los y las migrantes sin residencia legal o las víctimas de violencia.

# La COVID-19 afecta los Objetivos de Desarrollo Sostenible





## Sistema de Protección Social

El gobierno dominicano, como medidas de protección social ante la crisis por la COVID-19, desde el mes de abril implementó el programa “*Quédate en casa*”, que subsidia a los hogares más vulnerables, incluidos los trabajadores informales, para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad en la Red de Abastecimiento Social. Se implementaron como programas sociales para la respuesta; el *Fondo de Asistencia Solidaria para Empleados (FASE)* que beneficia a familias de trabajadores formales que fueron despedidos, y el “*Programa de Asistencia al Trabajador Independiente Pa’ti*”, con la finalidad de apoyar desde mayo a trabajadores independientes, además de otras medidas en materia de economía y finanzas.

El país ha logrado notables avances en el área social, resultado de una combinación del dinamismo económico que protegió el gasto focalizado en las familias más vulnerables y la expansión de los mecanismos de seguridad y protección social. Los efectos de la Pandemia implican riesgos de revertir la tendencia de reducción de la pobreza lograda desde el año 2012, con una tasa en 2019 de 21.0%. Para evitar recaídas y pérdida de estos logros el Sistema de Protección Social se apoyó del Sistema de Focalización de la pobreza a través del SIUBEN que permitió una expansión temporal de manera asertiva y rápida; a nivel horizontal (hasta alcanzar 1.5 millones de hogares) y, vertical (aumentando el monto de las transferencias monetarias).

Sin embargo, persisten brechas de cobertura en los sistemas por carencias de documentos de identidad en los hogares que constituyen barreras de entrada, por lo que fue necesario articular con entidades del Gabinete Social para proveer alimentos en especie a través de los Comedores Económicos y el Plan Social de la Presidencia, abarcando zonas geográficas de mayor incidencia de la pobreza. Se identifican oportunidades para adoptar un nuevo esquema de intervención con respuestas diferenciadas en la etapa de recuperación socioeconómica, que promuevan mayor equidad para la población en pobreza extrema, transformar los sistemas de monitoreo con un componente importante de digitalización, capacidades de llegar de forma diferenciada a las familias. Asimismo, lograr la conectividad con la oferta nacional de servicios de salud, educación y nutrición debe ponerse al centro de las políticas de recuperación, para construir un sistema de protección social de nueva generación, más inclusivo que facilite el retorno en condiciones mejoradas de las familias en pobreza y vulnerabilidad.

## Educación e infancia

Los servicios de educación presenciales en escuelas fueron interrumpidos a nivel nacional el día 19 de marzo, como una de las medidas de contención del contagio. Se estima que más de 1,800,000 niños y niñas han sido afectados por el cierre de las escuelas en el país. El Ministerio de Educación ha distribuido materiales físicos y colocado en su web materiales educativos para promover la continuidad de la educación en todos los niveles educativos, pero aún no hay evidencias del alcance del programa virtual. La pandemia encuentra a la República Dominicana con brechas grandes en el acceso a equipos tecnológicos e internet. Según ENHOGAR 2019, el 70% de la población general no tiene acceso a computador de escritorio, portátil o tableta, siendo el acceso menor en las zonas rurales (sólo el 15%) que en las urbanas (35%). Así, se puede concluir que un porcentaje elevado de la población escolar no ha podido continuar la educación a distancia y ha visto interrumpido de forma prolongada su proceso de aprendizaje lo que sabemos tendrá un impacto severo en su capacidad de aprender. El cierre de las escuelas tendrá un impacto significativo también en la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes vulnerables, que recibían una comida al día a través del programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación. Desde el cierre de las escuelas, el Instituto de Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación distribuye raciones crudas de alimentos a las familias para cada hijo o hija escolarizado. Sin embargo, este cambio de modalidad tiene sus riesgos para los niños, niñas y adolescentes de las familias más pobres ya que ante la pérdida del nivel adquisitivo en los hogares (por pérdida de trabajos y medios de vida) esos alimentos deben ahora suplir a toda la familia.

El cierre de escuelas y las estrategias de distanciamiento y contención social repercutirán de manera diferente en las niñas y los niños, especialmente en los adolescentes que, debido a los roles de género, pueden tener que asumir tareas de cuidado de hermanos o los oficios domésticos, lo que limita su acceso a los programas de aprendizaje a distancia y podría condicionar la vuelta a la escuela en especial de las niñas. Se estima también que esta situación puede igualmente agravar las estadísticas de uniones tempranas y la violencia y abuso de los niños y niñas.

Así mismo, se espera que problemas que están muy asociados a la pobreza como las uniones tempranas, el matrimonio infantil y el embarazo en las adolescentes puedan incrementarse como un efecto social de la pandemia.

### Protección

La pandemia está agravando las desigualdades de género ya existentes. En el contexto actual, las niñas, las adolescentes y las mujeres se encuentran en mayor riesgo de abuso, violencia de pareja y otras formas de violencia doméstica debido a la restricción de movimiento impuesta para prevenir el contagio. Esta restricción de la libertad ha tenido por consecuencia el aumento de las tensiones en el hogar. Además, la reducción de la movilidad y la desviación de fondos y de atención hacia la respuesta sanitaria está limitando el acceso de las mujeres y las niñas a los servicios de atención a las víctimas de violencia de género, así como a los programas preventivos. Según la Dirección contra la Violencia de Género del Ministerio Público de la República Dominicana, del 19 de marzo al 3 de mayo de 2020, aprox. Se recibieron 3.353 denuncias de víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales en el período de cuarentena, lo que pone de manifiesto la importancia de tomar medidas de violencia de género (VG) y proteger a esta población.

La pérdida de fuentes de ingresos familiares para trabajadores, unido al cierre de escuelas, están generando una variedad de situaciones relacionadas a la salud mental pueden aumentar los casos de violencia contra niños y niñas, adolescentes y mujeres. A ello se suma el muy probable aumento del trabajo infantil, la explotación sexual y la trata de personas.

La República Dominicana tiene una población migrante de 570,933 personas (ENI, 2017), 34,000 de los cuales son migrantes y refugiados de Venezuela (Plataforma Rv4, 2020), un estimado de 87% no cuentan con documentación o se encuentran estatus irregular, posicionando a este grupo en una situación de restricción para acceder a los programas de transferencia condicionadas, oportunidades y medidas desarrolladas por el estado en el marco de estrategias de protección social para mitigar el impacto de COVID-19. Las principales necesidades de ayuda humanitaria para estas personas son alojamiento (pago de alquiler), alimentos, salud y pago de servicios públicos. La mayoría personas más fuertemente impactadas requerirán con prioridad recursos de capital de trabajo para lograr su reactivación económica. La opción del retorno está prácticamente cerrada.

Según el Censo Nacional y la Encuesta Nacional de Hogares, el país tiene el 7/12% de las personas con discapacidad (PWD), uno de los grupos con alto riesgo de acceso a oportunidades y pleno desarrollo de los servicios mínimos que garantizan los derechos de subsistencia. Por otro lado, el 8% de la población dominicana está representada por personas mayores, las más afectadas por la pandemia debido a los riesgos de edad, condiciones de salud preexistentes y políticas y programas de protección social limitados dedicados a este grupo.

Con respecto a las personas LGBTI se estiman riesgos importantes de impacto de la salud causada por el estigma y la discriminación sufridos en los centros de salud debido a su orientación sexual, expresión de género e identidad. Además, los hombres homosexuales, los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres transgéneros representan los grupos con mayor prevalencia de VIH en la República Dominicana. Además, las personas LGBTI a menudo padecen enfermedades preexistentes debido al contexto de desigualdad y discriminación, lo que las ubica como un grupo de alto riesgo.

Según la información presentada por UNODC, las personas privadas de libertad representan actualmente unas 27,000 personas en el país. Este grupo se encuentra en condiciones de alto riesgo, debido a los espacios limitados disponibles para cumplir con los estándares mínimos para las medidas de distanciamiento físico, con el brote en algunos centros de detención. Las personas que usan drogas (PUD) sufren de estigma y se pueden encontrar informes e información limitados relacionados con esta población. Una de las pocas fuentes de información relacionadas con este grupo son los centros de tratamiento, que sirven a 3,300 PUD para reducir las transmisiones e infecciones por VIH y otras enfermedades.

### Seguridad alimentaria y nutricional

Los sistemas alimentarios se están viendo afectados directamente por la oferta y la demanda, e indirectamente por la reducción en el poder adquisitivo y la capacidad de producción y distribución de alimentos. El COVID-19 ya está impactando, directa o indirectamente, en los cuatro pilares de la seguridad alimentaria y nutricional que son la disponibilidad, el acceso, la nutrición y la estabilidad.

Sin embargo, lo que actualmente es una emergencia sanitaria y de salud podría devenir en crisis económica con impacto significativo sobre disponibilidad y acceso a alimentos, y a la seguridad alimentaria de los hogares de la República Dominicana. A pesar de la autosuficiencia alimentaria del país, ya que produce el 85% de los productos de la canasta básica alimentaria que consume, en este contexto se hace necesaria la articulación entre la oferta (disponibilidad) y la demanda (facilidad para el acceso) y respuestas efectivas ante los nuevos escenarios, limitaciones y retos que se presentan para asegurar las necesidades básicas alimentarias de la población y la consolidación de la seguridad alimentaria. Asimismo, existen brechas en la respuesta actual para asegurar una seguridad alimentaria integral, debido a la magnitud de la situación y la afectación extrema a los medios de vida de la población.

En tal sentido, debido a lo imperativo que resulta la seguridad alimentaria para el bienestar de un país y para la resiliencia de la población frente a cualquier shock, se considera necesario desarrollar acciones de apoyo a la respuesta nacional en el sector de seguridad alimentaria y nutricional, como forma de asegurar que se abordan las brechas y vacíos, aumentando el alcance humanitario y eficientizando las distintas respuestas posibles desde los diferentes actores, tanto gubernamentales y de la sociedad civil como del sistema de las Naciones Unidas, apoyando a las entidades y programas nacionales de respuesta para garantizar la seguridad alimentaria y sostenida hacia la recuperación nutricional y de medios de vida.

Un estimado de alrededor de 8 millones de personas han tenido su acceso a alimentos afectado. De acuerdo a estimaciones iniciales del PMA, aproximadamente 7.4% de la población de la República Dominicana estaría en inseguridad alimentaria severa. Esta crisis sanitaria está impactando de manera severa a las personas que ya padecen inseguridad alimentaria y nutricional, haciéndolas aún más susceptibles a la enfermedad y a morir a consecuencia de las complicaciones. Los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores, migrantes indocumentados y personas con condiciones crónicas como el VIH, son algunos de los grupos de población más vulnerables a la malnutrición, y también al COVID-19. Por tanto, es necesario tomar medidas de respuesta orientadas a la nutrición de los grupos vulnerables y consejería sobre consumo adecuado de los alimentos.

Esta situación provocará un aumento de la desnutrición aguda y deficiencias importantes en micronutrientes en niños y niñas menores de cinco años y en embarazadas.

### Agua, saneamiento e higiene

El adecuado acceso a agua potable, saneamiento y condiciones higiénicas es esencial para proteger la salud de las personas. Asegurar la aplicación consistente de prácticas de higiene y acceso continuo a agua y saneamiento en comunidades, hogares, mercados e instalaciones de atención médica ayudará a prevenir la transmisión de persona a persona del virus.

En República Dominicana el 16 % de la población no tiene cobertura de agua potable. Asimismo, menos de la mitad de los hogares (46%) disponen de acometidas intradomiciliarias, destacándose la diferencia entre zonas urbanas, con un 86% de este servicio, y zonas rurales, donde este servicio alcanza solo al 14%. La existencia de más de 500 pequeños acueductos rurales manejados por la comunidad y otro número importante de esos acueductos que no han sido identificados por los entes operadores representa un gran desafío para su mantenimiento y la disponibilidad de insumo básicos para potabilizar el agua.

La inadecuada gestión de residuos sólidos y la contaminación atmosférica supone también un enorme reto a nivel nacional. Se estima que el país genera más de 11,000 toneladas/día de residuos sólidos, que en su mayoría son dispuestas finalmente en los cerca de 350 vertederos a cielo abierto existentes en el territorio. Estos vertederos no cuentan en general con sistemas de control para la prevención de la contaminación adecuados, problema que se ha puesto de manifiesto recientemente durante el incendio del vertedero de la Duquesa (uno de los principales vertederos cerca de la capital) y que ha tenido importantes consecuencias en la salud de la población del Gran Santo Domingo.

La República Dominicana enfrenta grandes retos para asegurar el acceso universal a servicios adecuados de agua potable y saneamiento, lo que supone desafíos adicionales a la lucha contra la COVID-19.

## 2.3 El impacto económico de la crisis

Las medidas nacionales adoptadas para contener la propagación del virus están teniendo repercusiones en diferentes ámbitos económicos, lesionando de forma desproporcionada a los trabajadores y trabajadoras informales y a los grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad. Aplicando un enfoque integrador se abordan los efectos de la pandemia desde 3 niveles de perspectiva; a nivel macroeconómico; evaluando la posición fiscal y del sector externo, las actividades económicas y el mercado de trabajo; a nivel sectorial o meso económico, identificando los eslabonamientos productivos que inciden en traccionar el dinamismo en el empleo y de la actividad en otros sectores; y a nivel microeconómico apropiando un análisis de cómo se distribuyen los efectos en los trabajadores y las poblaciones en pobreza y vulnerabilidad.

### Análisis macroeconómico

La República Dominicana es una economía pequeña y abierta al resto del mundo y es por tanto vulnerable a los ciclos y las diferentes variables económicas de las naciones con las que más interactúa como Estados Unidos, China y algunos países europeos. Variaciones en los precios internacionales de los bienes primarios (como el oro y el petróleo) o tasas internacionales, entre otros, generan impactos directos sobre las cuentas macro-fiscales.

- La interrupción de las actividades productivas y otras medidas de salud pública implementadas para aplanar la curva de contagio deprimen la actividad económica nacional y tiene un efecto en la contracción de la demanda.
- Disrupciones en la logística como el transporte y el almacenamiento, así como en la oferta de bienes a nivel internacional impondrían un riesgo en las importaciones nacionales que abastecen el mercado doméstico de bienes de consumo, insumos, petróleo y combustibles refinados, y bienes de capital.
- El turismo está siendo el principal afectado por el impacto del COVID-19, tanto debido a la caída autónoma en la demanda asociada al riesgo de contagio como por las respuestas de política a nivel internacional y nivel local, en particular el cierre de fronteras (vía tierra, mar y aire) al tránsito de pasajeros. Este sector, tiene una relevante participación en el PIB (aproximadamente el 7.4% del valor agregado), los ingresos fiscales e importantes encadenamientos hacia atrás con otras actividades económicas. Estimaciones de la CEPAL arrojan una contracción de la actividad turística en el Caribe de 25%, lo cual implicaría un alto riesgo para este sector en la República Dominicana y por lo tanto en el empleo (este sector emplea el 7.7% de la población ocupada).
- Otro factor relevante por analizar son los ingresos por remesas. Estas representan la tercera fuente de ingresos de divisas en el país y alcanzan el 9.5% de los hogares a nivel nacional, representando en promedio el 4.8% de los ingresos de los hogares. Una reducción de los ingresos por remesas como resultado de una severa afectación de los mercados laborales en Estados Unidos (76.6% de las remesas provienen de este país) y España (10.2% de las remesas provienen de este país), podrían implicar una reducción temporal de los ingresos de hogares y un incremento en la incidencia de la pobreza.
- A nivel doméstico, otro sector que se verá afectado por la crisis será el comercio, el cual representa el 10.1% del valor agregado. Este constituye un sector primordial, no solo por ser una de las principales fuentes de ingresos y empleos en la economía, sino también dada su capacidad de potenciar el crecimiento, a través de las cadenas de producción (oferta y demanda), el desarrollo de las comunidades y la tecnología. El comercio minorista de productos no alimenticios verá una virtual paralización de sus operaciones por las medidas de distanciamiento adoptadas, las cuales implican la desaceleración de la producción o incluso su interrupción total.
- El epicentro de la pandemia está asociado a las dinámicas de los mercados laborales impactándose de forma desproporcionada los trabajadores y trabajadoras de distintos sectores que desarrollan actividades informales (53.0% del empleo); en especial las MIPyMES que representan más de 98.0% del tejido empresarial del país.
- Al analizar la situación del sector comercio desde la perspectiva del empleo, el 20.3% de la población ocupada se ubica en esta actividad económica. Más importante es la alta participación de los ocupados en el empleo informal, representando el 62.7% de la ocupación.
- Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) serán significativamente afectados por una fuerte disminución de sus ingresos, el aumento de la insolvencia y la pérdida de puestos de trabajo. En consecuencia,

los efectos del desempleo afectarán de manera desproporcionada a la población desfavorecida y a los estratos vulnerables de ingresos medios.

- El limitado espacio fiscal impone una presión sobre las posibles medidas que pueda implementar el Gobierno dominicano para salvaguardar y proteger a las poblaciones más vulnerables. Se requerirán de nuevas fuentes de financiamiento que impondrán a su vez mayor presión sobre las cuentas fiscales en el futuro.

En cuanto a la estimación de crecimiento de la economía, organismos internacionales han analizado y estimado las implicaciones de la pandemia de COVID-19. La magnitud del impacto está sujeta a factores como la duración de la pandemia, su expansión, a la efectividad de las medidas adoptadas de prevención y más aún sobre las acciones llevadas a cabo por el Gobierno, sector privado y sociedad civil para contener y amortiguar los efectos en la salud y los grupos más vulnerables.

En este sentido, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han realizado estimaciones sobre el comportamiento de la región de América Latina y el Caribe y **se estima una contracción de la actividad doméstica entre 0.0% y -1.0% para el 2020.**

A corto plazo, los costos económicos del COVID-19 implicarían mayor desempleo y menor ingreso (principalmente por la suspensión de la actividad productiva interna), incidiendo en aumentar la pobreza. A mediano y largo plazo, los efectos de la pandemia supondrán el quiebre de empresas (MIPYMES), reducción de la inversión privada, lo que conllevaría al deterioro de las capacidades productivas y de capital humano y por consiguiente menor integración en cadenas de valor, reduciendo el crecimiento económico (CEPAL, 2020).

### **Análisis sectorial o mesoeconómico**

El análisis mesoeconómico estaría asociado a la ruptura de eslabonamientos en un sector que impacta otras actividades a través de los insumos que demanda, la transferencia del efecto a través de la caída del empleo, y su participación en la producción nacional. En esta coyuntura, las actividades de turismo, zonas francas y la construcción merecen una atención particular:

- El turismo tiene importantes encadenamientos hacia atrás por lo que el cierre de operaciones tiene efectos indirectos o de segunda ronda que hay que considerar. La evaluación de datos a través de la matriz oferta – utilización evidencia el encadenamiento con sectores específicos de los cuales demanda insumos;
  - Demanda insumos de servicios diversos como el comercio, transporte, telecomunicaciones, finanzas y servicios inmobiliarios, equivalentes al 18.2% del valor bruto de producción.
  - Demanda del sector industrial un 9.3% de su producción, de energía y agua de 7.3%, agropecuarios un 2.1% y de importaciones 4.0%.

En el marco de la recuperación, el turismo requiere priorizarse. Mas allá de su aporte al empleo y al PIB, tracciona otras actividades de forma importante, al demandar insumos que se traducen en empleos indirectos.

- En relación a las manufacturas de zonas francas, su contribución al PIB fue de 3.3% en el año 2019 y emplea a más de 170 mil personas (en su mayoría adulta joven), que equivale al 3.8% de la población ocupada y más del 35.0% del empleo industrial. Las zonas francas tienen importantes vínculos a través del empleo y hacia atrás con la elaboración de productos alimenticios, productos de caucho y plásticos, alimentos, la agricultura, la energía y los servicios.
- La construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos en los últimos años, gracias al fuerte empuje de la inversión pública y privada. En promedio entre 2017 y 2019, explica el 11.3% del PIB y tiene una participación de 7.7% de la población ocupada. Los insumos domésticos equivalen al 40% del valor bruto de producción (minería no metálica como baldosas y cerámica, varillas de acero, transporte, finanzas, productos plásticos y químicos.

## Análisis microeconómico

Evaluar los efectos de la pandemia a nivel microeconómico permite estimar efectos en los ingresos de los trabajadores y en las familias, diferenciando por condiciones de precariedad del trabajo y las vulnerabilidades que en la coyuntura tendrían mayores riesgos de afectación.

### i. Efectos en la fuerza laboral y niveles de informalidad:

Las repercusiones a nivel de la fuerza laboral pueden evidenciarse a través de la calidad de la participación en el trabajo y como estas características interactúan con las precarias condiciones de vida de los hogares. En términos generales, de un total de población ocupada de 4,539,256 personas, la fuerza de trabajo en condición de informalidad representa 53.0%. Al evaluar esta condición por actividades económicas, se observa una distribución heterogénea, que debe considerarse para las estrategias de mitigación y recuperación:

- Se verifican proporciones importantes de empleo informal en agropecuaria (86.2%), construcción (83.3%), transporte y comunicaciones (71.3%), comercio (62.7%) y hoteles, bares y restaurantes (50.3%), las que aglutinan un total de 2,215,370 trabajadores, representando un 48.8% de la población ocupada total.
- Explorando los datos por género, repercutiría aún más en actividades informales de alto empleo femenino como el turismo (65.9%), otros servicios (70.9%) y el comercio (44.2%).
- Para el caso de los hombres, tendría mayor repercusión en la agricultura y construcción con más del 90.0%, electricidad (100.0%), intermediación financiera (80.2%) y transporte (99.1%) como actividades con informalidad propiamente masculinizadas.
- En el caso de las personas que viven con VIH el 53.6% percibe menos de RD\$10,000 mensuales y el 30% obtienen su principal fuente de ingreso como trabajadores independientes.
- Desde el enfoque de discapacidad, el 64% de las personas con discapacidad no tiene acceso a un trabajo decente, en comparación con el 52.5% de las personas sin discapacidad.
- Las MIPyMES, representando más del 98% del tejido empresarial que generan el 54.4% del empleo nacional, enfrentan limitaciones para adaptarse a los desafíos que implica la crisis por un bajo componente tecnológico y retos para articular con cadenas de valor de amplio alcance.

La coincidencia de la pobreza y el trabajo informal potencia los impactos de la pandemia:

- Las cifras evaluadas de la pobreza señalan que, de la población ocupada, un 49.0% se encuentra en pobreza general y un 4.2% para la pobreza extrema.
- Para el comercio se reporta un 62.7% de trabajadores informales a nivel general, sin embargo, al desagregar por la población pobre se incrementa a 72.3%.
- En los otros servicios, la informalidad representa un 66.5% y para el segmento en pobreza se incrementa a 70.9%.
- Para el caso del turismo, ocurre de manera similar, a nivel total registra un componente de informalidad de 50.3%, pero ocupa un 70.7% de la población en situación de pobreza.
- Al mismo tiempo, se evidencian actividades con alto componente de informalidad y pobreza como la construcción que reporta una participación de más del 90.0%.

### ii. Efectos por la reducción de los ingresos de los hogares.

De acuerdo a los datos disponibles para el año 2018, la tasa de pobreza total se encuentra alrededor del 24.0%; mientras que, la de pobreza moderada registra 20.5% y la de pobreza extrema, el 3.0%.

Con el supuesto de que los ingresos familiares se reduzcan en una proporción de 20.0%; que resulta el escenario más probable, la tasa de pobreza total se incrementaría a 36.0%, equivalente a 1,252,470 personas más (12.2 puntos más). Un segundo escenario, simula una reducción del 40.0% en los ingresos, obteniéndose como resultado un aumento de la pobreza general en los hogares de 29.0 puntos porcentuales adicionales.

Múltiples determinantes económicos y sociales existentes previo a la crisis que diferencian las oportunidades de resiliencia y capacidades del conjunto de familias para enfrentar los riesgos, que pueden ampliarse en esta coyuntura.

### 3. Una oportunidad para construir un futuro mejor

El virus está dejando expuestas fragilidades estructurales que podrían haberse atenuado en el pasado mediante respuestas de desarrollo más rápidas, efectivas y universales. Como ha destacado el Secretario General, lo que ha hecho que tantos países en todos los continentes sean tan vulnerables ante esta crisis han sido los déficits de desarrollo, el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los retrasos en nuestras trayectorias en materia de ODS. Es el momento de redoblar los esfuerzos para construir economías y sociedades más inclusivas y sostenibles que sean más resistentes frente a las pandemias, el cambio climático y otros desafíos globales, combatiendo los impactos con un enfoque en las personas. Para ello es necesario preservar la Agenda 2030 y cumplir los ODS.

La República Dominicana es una de las economías de mayor dinamismo en la región de América Latina, con un crecimiento promedio anual de 5.6% en la presente década. El país ha logrado notables avances en el área social, resultado de una combinación del dinamismo económico y expansión de los mecanismos de seguridad y protección social. Estas mejoras son atribuibles a incrementos en el gasto social que permitió expandir la cobertura de los servicios sociales; a la consolidación del sistema de protección social, un mayor alcance de los programas bajo la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) y de las intervenciones del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), en particular a través del programa de transferencias condicionadas Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Estas estructuras han sido capitales durante los primeros meses de la crisis para proteger a la población más vulnerable.

Si bien la República Dominicana ha logrado sacar de la pobreza a muchas personas en los últimos años, éstas se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y por tanto su situación puede bascular fácilmente a la situación anterior ya que no disponen de los recursos necesarios para hacer frente a choques como el que están enfrentando. Las previsiones apuntan a que la caída del desarrollo humano será importante ya que el país no cuenta con los medios para gestionar los efectos sociales y económicos de esta crisis.



Debemos responder con urgencia para detener el impacto de esta crisis, salvar vidas y mitigar la pérdida de los logros en desarrollo humano, y debemos hacerlo acompañando al gobierno y a las poblaciones a responder de un modo que permita construir un futuro mejor. Las respuestas deben apuntar a proteger a las personas y al planeta, a preservar los logros en

todos los ODS, garantizar la igualdad, promover la transparencia, la responsabilidad y la colaboración, incrementar la solidaridad y poner la voz, los derechos y la voluntad de las personas en el centro.

## 4. Una estrategia integrada

El Plan estratégico de Respuesta del SNU se centra tanto en la respuesta a las necesidades inmediatas y más urgentes en el ámbito de la salud y otros sectores directamente impactados por la crisis (acceso a servicios básicos y protección de la población vulnerable), como en las intervenciones necesarias para responder al impacto socioeconómico en el medio y largo plazo. Este plan tiene una **duración de 18 meses** y el objetivo de apoyar los esfuerzos del Gobierno de la República Dominicana en la respuesta y recuperación ante la crisis.



Es una estrategia multi-sectorial e interagencial y prioriza el apoyo a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión. Conjuga los esfuerzos necesarios en lo inmediato, en el medio y el largo plazo, y está alineada con los marcos estratégicos definidos a nivel global por el Sistema de Naciones Unidas en el ámbito de la salud, en el ámbito humanitario y desde el sistema de desarrollo a través del marco de respuesta y recuperación socioeconómicas. Si bien la estrategia combate los impactos tanto directos como indirectos de la pandemia en paralelo, el objetivo es que las diferentes intervenciones contribuyan a construir un futuro mejor y confluyan hacia acciones de desarrollo sostenible alineadas con la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo del país. La operacionalización de esta estrategia se articula a través de los planes sectoriales, anexos a este plan, donde se describen los detalles operacionales a nivel de objetivos sectoriales, intervenciones prioritarias y presupuestos, así como un marco para el monitoreo y evaluaciones del plan.

El plan se articula alrededor de tres objetivos estratégicos:

### **Objetivo estratégico 1: Contener la propagación de epidemia COVID-19 y reducir la morbilidad y mortalidad**

- Apoyo a la preparación de los sistemas y servicios de salud y al diseño y la aplicación de medidas de salud pública y para proteger a la población más vulnerable, incluyendo a las personas envejecientes y aquellos con enfermedades crónicas y condiciones de salud delicadas.
- Detección y testeo de casos a través de vigilancia epidemiológica y pruebas de laboratorio, para trazar la transmisión del virus



- Prevenir, suprimir e interrumpir la transmisión a través del aislamiento de casos, cuarentena y distanciamiento físico, así como la cancelación de eventos y aglomeraciones.
- Proveer servicios de salud seguros y efectivos para asegurar el tratamiento y cuidado de pacientes de alto riesgo
- Asegurar la continuidad de los servicios esenciales de salud, incluyendo la inmunización, atención del VIH y la tuberculosis, salud reproductiva -siendo las embarazadas un grupo establecido como prioritario, servicios de anticoncepción, salud psicosocial y mental, así como la cadena de suministros para ambos la respuesta a la epidemia y la continuidad de los servicios esenciales.

**Objetivo estratégico 2. Contribuir a asegurar el acceso a servicios básicos y la protección de la población vulnerable, así como mitigar el deterioro de los medios de vida**

- Preservar la capacidad de las personas más vulnerables y afectadas para satisfacer el consumo mínimo de alimentos y otras necesidades básicas causadas por la pandemia, a través de sus actividades productivas y el acceso a redes de protección social y asistencia humanitaria.
- Garantizar la continuidad de servicios básicos como la educación, la atención y prevención de violencia de género y abuso sexual, servicios de agua y saneamiento, protección de los grupos de población más expuestos y vulnerables a la pandemia
- Asegurar la continuidad de la cadena de suministro de productos y servicios esenciales, tales como alimentos, insumos agrícolas y productivos críticos en el tiempo, kits de higiene y dignidad, salud y otros artículos no alimentarios.

**Objetivo estratégico 3. Responder de forma sostenible a los efectos y el impacto socioeconómico del COVID-19.**

- Apoyo a la recuperación de los sistemas de salud, la preparación y el fortalecimiento, con el interés puesto en la atención sanitaria primaria y la Cobertura Universal en Salud, así como a la preparación ante futuros brotes
- Fortalecer y ampliar las capacidades del sistema de protección social del país, aumentándolo y expandiéndolo para hacerlo más resiliente y favorables a los pobres
- Proteger y recuperar los medios de vida, protegiendo el empleo, las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores vulnerables de la economía informal.
- Asegurar la disponibilidad de información sobre afectaciones en salud y socioeconómicas, así como de las condiciones de vulnerabilidad de la población para ponerla a disposición de las autoridades gubernamentales y otras instituciones y poder formular políticas y ayudas de respuesta y recuperación informadas.
- Promover el desarrollo a través del fortalecimiento de los gobiernos locales y la cohesión comunitaria, así como la mejora de sus capacidades de recuperación y de resiliencia frente a los choques.

## 5. Los pilares de la respuesta y recuperación socioeconómicas en República Dominicana

La humanidad enfrenta un riesgo global que requiere más que nunca una respuesta coordinada ante los impactos y riesgos sanitarios, sociales y económicos y en donde el Sistema de las Naciones Unidas puede jugar un rol determinante acompañando al Gobierno a actuar de forma articulada con un enfoque en las personas, especialmente las más afectadas: mujeres, personas mayores, jóvenes, trabajadores de bajos salarios, pequeñas y medianas empresas, el sector informal y grupos vulnerables. La hoja de ruta sigue siendo la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

Al respecto es necesario señalar que la República Dominicana ha tenido en la última década logros muy importante en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tales como la reducción de la pobreza, la malnutrición y desnutrición, la cobertura en salud, educación, agua y energía. Estos logros pueden verse seriamente socavados si no se actúa con la clara conciencia de su protección, haciendo uso de las mayores capacidades institucionales que ha desarrollado el país en sus políticas de protección social, medición de la pobreza y planificación del desarrollo.

En este marco, sostener los logros del desarrollo es una tarea fundamental en el acompañamiento a las autoridades y a la población dominicana. Es ahora donde cobra mayor relevancia el informe sobre Desarrollo Humano 2014 - Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia – cuando señala que los grandes logros en el desarrollo humano podían resultar rápidamente socavados por un desastre o una depresión económica, tal como hoy se acerca por acción de la pandemia del COVID 19. Se hace necesario poner el énfasis en la resiliencia humana, que asegure que las opciones de la gente sean sólidas, ahora y en el futuro, y que permitan a las personas hacer frente y adaptarse a los eventos adversos.

La estrategia en materia de respuesta y recuperación socioeconómicas del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana se desarrollará mediante el trabajo articulado en los 5 ejes:



### I. SALUD PRIMERO

El brote de COVID-19 está saturando los sistemas de salud. Los países deben tomar decisiones difíciles para equilibrar las exigencias de responder directamente sin dejar de mantener la prestación de servicios de salud esenciales, mitigando así el riesgo de colapso del sistema. El sistema de Naciones Unidas para el desarrollo brinda su apoyo a los Gobiernos a la hora de tomar estas difíciles decisiones.

Ante estas elecciones, el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo promoverá una estrategia de dos fases. En primer lugar, medidas orientadas para permitir que los países mantengan los servicios de salud esenciales para salvar vidas, incluso cuando brindan respuesta al pico de demanda de cuidados intensivos. En segundo lugar, una iniciativa complementaria que apunta a la recuperación de los sistemas de salud, la preparación y el fortalecimiento, con el interés puesto en la atención sanitaria primaria y la Cobertura Universal en Salud, y la preparación para futuros brotes.

### **Áreas de trabajo propuestas**

- Brindar apoyo analítico y en materia de políticas, y una rápida orientación técnica para los servicios y sistemas de salud, incluyendo apoyo para prevenir, suprimir e interrumpir la transmisión de la COVID19.
- Implementación del programa y apoyo técnico, logística, suministro y operaciones del COVID-19, incluyendo las adquisiciones directas y la distribución de suministros esenciales básicos para los servicios de salud.
- Apoyo a los sistemas y servicios de salud, detección y testeo, para proteger a la población más vulnerable, incluyendo a las personas envejecientes y aquellos con enfermedades crónicas y condiciones de salud delicadas.
- Apoyo para mitigar el riesgo en las poblaciones vulnerables
  - Apoyo a la respuesta de salud inclusiva para personas con discapacidad y personas viviendo con VIH/SIDA. Asimismo, apoyo a la programación conjunta, el desarrollo de capacidades y la gestión del conocimiento sobre respuesta que incluyan estos colectivos.
  - Acompañamiento de las personas adultas mayores que enfrentan una situación de mayor riesgo por prevalencia de enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, problemas respiratorios y/o circulatorios) que alcanza 204,705 personas (el 28.7%) de esta población en condiciones de pobreza.
  - Apoyo a mujeres embarazadas y las mujeres con recién nacidos y niños pequeños, garantizando intervenciones de salud adaptadas para este grupo.
  - Comunicación y sensibilización para incrementar la percepción del riesgo y motivar al cuidado personal y familiar.
- Apoyar la continuidad de los servicios de atención integral materna y neonatal, servicios de salud sexual y reproductiva, vacunación y servicios de salud integrados para reducir mortalidad por Enfermedades No Transmisibles (ENT) y COVID
- Reforzar la implementación de las estrategias para eliminación de la malaria, la lucha contra el dengue y eliminación de enfermedades tropicales desatendidas

## **II. PROTEGER A LAS PERSONAS**

La crisis del COVID-19 tiene un impacto mucho mayor sobre los más pobres y los más vulnerables, con importantes implicaciones intergeneracionales para las familias pobres. Como se demostró durante la crisis financiera de 2008, los países con sólidos sistemas de protección social y servicios básicos fueron los que menos sufrieron y los que más rápidamente se recuperaron.

Durante los próximos meses, los gobiernos de todo el mundo tendrán que adaptar, extender y aumentar las transferencias monetarias, los programas de asistencia alimentaria, los programas de seguridad social y los subsidios por hijos a cargo para brindar un mayor y mejor apoyo a las familias, entre otras cosas.

### **Áreas de trabajo propuestas**

- Fortalecer y expandir sistemas de protección social resilientes y favorables a los pobres:
  - Apoyar una mejor integración y uso de datos y plataformas digitales para el diseño de programas y la toma de decisiones. Estos sistemas van a permitir una mejor focalización con estímulos diferenciados, así como un mejor sistema de seguimiento de los programas sociales y su impacto en las familias más vulnerables y afectadas por la crisis.
  - Promover medidas de protección social y estímulos fiscales que reflejen la economía del cuidado y sean inclusivos, llegando a trabajadores domésticos e informales, personas con discapacidad, mujeres, personas con VIH, migrantes, población LGTBI y otros grupos vulnerables.

- Avanzar en la cobertura universal de salud y apoyar los sistemas y servicios de atención médica
  - Explorar programas de transferencias diferenciadas por la condición de pobreza de las familias del programa de transferencias condicionadas para, por ejemplo, poder asignar de un monto mayor para las familias en pobreza extrema. Medidas como éstas lograrían incidir en objetivos de equidad vertical y permitirían focalizar en las poblaciones que enfrentan mayores limitaciones para la recuperación.
- Mantener los servicios esenciales de alimentación y nutrición:
    - Esfuerzos adicionales en materia de lucha contra la malnutrición, a través de la promoción de la salud materna, prácticas de lactancia materna adecuadas, dietas diversas ricas en nutrientes y practicas receptivas para niños y niñas.
    - Además, serán necesarios esfuerzos adicionales para la detección temprana y tratamiento de niños y niñas menores de cinco años, y embarazadas con desnutrición aguda o riesgo de desnutrición aguda, así como asegurar opciones de comidas saludables y asequibles para niños y niñas, mujeres y familias, así como para otras poblaciones vulnerables.
  - Garantizar la continuidad y la calidad del agua y de los servicios de saneamiento.
  - Garantizar la continuidad del aprendizaje para todos los niños, niñas y adolescentes, asistiendo al gobierno en la promoción de la educación digital y otras formas de aprendizaje remoto, y apoyar al gobierno en el proceso de reinicio de clases presenciales y detección de niños/as que han dejado la escuela durante el receso por la pandemia.
  - Respaldo la continuidad de los servicios sociales y el acceso a los refugios, asegurando la primera línea de respuesta para niños/niñas, mujeres y familias en riesgo de violencia, abuso, explotación, abandono y separación familiar.
  - Garantizar la prestación de servicios básicos esenciales, como la asistencia de salud maternal, los programas de salud sexual reproductiva y los servicios destinados a víctimas de la violencia de género
  - Apoyar la creación de esquemas de solidaridad público-privada y alianzas para construir sistemas de protección social resilientes que puedan resistir a los choques, crear estrategias para los trabajadores del sector informal y diseñar una nueva generación de empleos verdes y resilientes que apoyen el emprendimiento liderado por jóvenes.

### III. RECUPERACIÓN ECONOMICA

La crisis del COVID-19 está generando una crisis de empleo y de subsistencia que amenaza el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El epicentro de la pandemia está asociado a las dinámicas de los mercados laborales impactándose de forma desproporcionada los trabajadores y trabajadoras de distintos sectores que desarrollan actividades informales; en especial las MiPyMES que representan más de 98% del tejido empresarial del país. Además, una recesión económica mundial repercutirá en los desplazamientos de la población mundial y, por consiguiente, afectará a países como República Dominicana con altos niveles de migración y altos flujos de envío de remesas.

Los trabajadores más vulnerables a esta crisis se encuentran en la economía informal que constituye el 54 % de la mano de obra en el país. Carecen de acceso a la protección social o tienen un acceso limitado a ella y tampoco tienen la seguridad económica necesaria para hacer uso de permisos por enfermedad, recibir tratamiento si es necesario o hacer frente a un confinamiento.

También hay importantes cuestiones de género. Debido a las desigualdades ya existentes, las mujeres enfrentan mayores dificultades a la hora de encontrar nuevos empleos u oportunidades de emprender un negocio para su recuperación económica.

La recuperación económica consiste en proteger el empleo y los trabajadores; garantizar el trabajo digno; y apoyar a la economía informal, las MiPyMES y las cadenas de valor estratégicas para el país como el turismo, la construcción y las zonas francas. Pero debemos ir más allá; esta recuperación es también una oportunidad para transformar el aparato

productivo acelerando el proceso de digitalización, apostando por la economía verde, incorporando prácticas empresariales inclusivas y construyendo sectores económicos más resilientes.

#### **Áreas de trabajo propuestas**

- Análisis y evaluación de necesidades para identificar nuevas brechas y oportunidades de fortalecer la actividad productiva priorizando minimizar la pérdida de empleo, sobre todo en los grupos poblacionales más vulnerables.
- Ayudar a las empresas a mantener sus "puertas abiertas" operando de forma remota a través de plataformas digitales, con especial enfoque en implementar un proceso acompañado de digitalización de los negocios informales y MIPyMES a través de procesos innovadores.
- Implementar programa de recuperación del sector MIPyMES a través de estrategias para mantener activos los negocios, manejar eficientemente pedidos y entregas, organizar las finanzas en tiempos de incertidumbre, mantener las empresas limpias y seguras, aprovechar nuevas formas de pago digitales; así como generar productos y promociones atractivos para los clientes.
- Establecer plataformas de pago digital y sistemas de comercio electrónico, con un enfoque en pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres y expandiendo la digitalización para mujeres;
- Apoyar la reapertura del sector turístico dominicano. La crisis presenta una brecha de oportunidad para relanzar el turismo como actividad sostenible y segura, con transformaciones de procesos para un uso sostenible de la energía y el agua, y la diversificación de la actividad turística, paulatinamente transformando el modelo 'todo incluido' por su intensidad del uso del capital natural.
- Promover la economía verde: reequilibrar la naturaleza, el clima, la economía. Este es el momento de restablecer el equilibrio entre las personas y el planeta, diseñando soluciones basadas en la naturaleza.
- Priorizar la recuperación de actividades económicas donde la participación femenina tiene una elevada proporción en la informalidad apoyando la rápida reactivación. En este segmento se encuentran actividades como el comercio (70.5%), los otros servicios (72.1%) y el turismo (60.5%).

#### **IV. RESPUESTA MACROECONOMICA Y COLABORACION MULTILATERAL**

La economía mundial ha entrado en la recesión económica más profunda desde la Gran Depresión, con la posibilidad de una crisis financiera, que tendrá importantes consecuencias para los grupos de población y los hogares vulnerables, algunos de los cuales ya están al borde de la pobreza. El COVID-19 está causando estragos en economías ya débiles con las medidas de contención establecidas para controlar su propagación. Esta crisis sin precedentes requiere medidas inéditas: en todas partes se necesita urgentemente un esfuerzo fiscal y financiero de gran magnitud y de carácter anticíclico. El Secretario General ha pedido que se dé una respuesta multilateral amplia equivalente al 10 % del PIB mundial.

#### **Áreas de trabajo propuestas**

- Realizar evaluaciones de impactos y necesidades de los hogares más vulnerables en tiempo real, que permita el análisis de tendencias, la formulación y el ajuste de los programas de recuperación en respuesta a la evolución de los indicadores socioeconómicos.
- Brindar al gobierno asesoría de expertos en temas relacionados con la atención a poblaciones vulnerables y recuperación socioeconómica. Socializar buenas prácticas innovadoras a través de redes globales de conocimiento.
- Fortalecimiento de análisis estadísticos y de datos que incluya género, personas con discapacidad, población LGTBI, migrantes, personas con VIH y otras poblaciones vulnerables

- Análisis de políticas sectoriales y producción de notas de que permitan realizar propuestas de Intervenciones de política pública: Proteger el empleo, reducir riesgos de profundizar las desigualdades estructurales preexistentes y adecuar la respuesta a las necesidades de las poblaciones objetivo
- Evaluaciones de impacto de sector MIPYMES que representa el 98% del tejido social y genera un 54% de los empleos en República Dominicana.
- Análisis de sectores estratégicos como el turismo, utilizando técnicas innovadoras como el Problem Space o Sensemaking para poder incorporar una mirada transformadora y de aceleración de sostenibilidad, inclusión y resiliencia en la recuperación del aparato productivo.
- Apoyar el desarrollo de planes de recuperación tanto a nivel nacional, territorial y sectorial basados en las evaluaciones de impacto socioeconómico y otras evaluaciones sectoriales y o específicas.

## V. COHESIÓN SOCIAL Y RESILIENCIA COMUNITARIA

Las comunidades tendrán que soportar la peor parte del impacto socioeconómico del COVID-19. También está en sus manos aplanar la curva de infecciones, responder a la pandemia y garantizar la recuperación a corto, mediano y largo plazo, para lo cual necesitarán inversiones. Al mismo tiempo, justo cuando ese capital social (las redes de relaciones entre las personas que viven y trabajan en una determinada sociedad, que permiten a esa sociedad funcionar con eficacia) esté en su apogeo, la pandemia es posible ejerza una presión considerable sobre la cohesión social, con posibilidades de ampliar las líneas de fractura existentes y creando otras nuevas.

### Áreas de trabajo propuestas

- Fomentar el diálogo social inclusivo para la recuperación socioeconómica en las comunidades afectadas, fortaleciendo la cohesión social a través de procesos participativos.
- Empoderar y conectar organizaciones de la sociedad civil y redes comunitarias con estrategias de respuesta, utilizando un amplio espectro de herramientas y metodologías de evaluación rápida suficientemente probadas para generar datos comunitarios (desagregados por edad, género, etc.), el levantamiento de mapas a nivel comunitario a la vez que se fortalece su acercamiento y abordaje como un actor relevante de la comunidad.
- Posicionar un bono de impacto en reducir la pobreza al reducir emisiones en comparación con la energía tradicional. Es una oportunidad de iniciar la transformación hacia comunidades sostenibles, seguras y autosuficientes en energía sostenible.
- Promover en las comunidades la transición hacia un modelo de autoconsumo energético limpio de los hogares, empresas y del gobierno, a través de energía fotovoltaica.
- Implementar una estrategia de comunicación como factor clave en la recuperación, por lo que se propone integrar a las acciones del estado, un enfoque de mensajes adecuados a las capacidades de lectoescritura y comprensión de las poblaciones vulnerables, para reducir al máximo los mensajes errados y percepciones y pueda traducirse en una estrategia de cambio de comportamiento más allá de sólo ofrecer información adecuada.

## 6. Aspectos transversales

### Protección contra la explotación y el abuso sexual (SEA)

El Sistema de Naciones Unidas está fuertemente comprometido con la mejora del sistema para prevenir la explotación y los abusos sexuales y responder a los casos existentes. En su informe sobre "Medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso sexuales" (A / 74/705), el Secretario General informó sobre las actividades para fortalecer el marco de rendición de cuentas diseñado para mantener ese compromiso y la coherencia en lo que tiene que ver con el sistema para prevenir y responder a la explotación y abuso sexual (SEA). La estrategia se centra en cuatro áreas de acción principales: dar prioridad a las víctimas; poner fin a la impunidad; fomentar la participación de la sociedad civil y los asociados externos; y mejorar las comunicaciones estratégicas en aras de la concienciación y la transparencia.

Así, el Equipo País de Naciones Unidas en República Dominicana ha desarrollado un Plan de Acción anual (2020) que incluye medidas relacionadas con la mitigación de riesgos, la participación de la comunidad, las normas mínimas de protección para los socios contratantes, la recepción y presentación de denuncias y las iniciativas para promover un enfoque centrado en las víctimas.

### Comunicación y abogacía

El Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana cuenta con un plan de comunicación que complementa la respuesta al COVID-19. Hay dos aspectos cruciales para las comunicaciones de crisis: las comunicaciones externas apoyando a nuestros socios, las comunidades afectadas, los medios de comunicación, el sector privado, los donantes y la sociedad civil en general; y comunicaciones internas con el personal que impacta además a sus dependientes.

Durante la pandemia, el Grupo de Interagencial de Comunicación acompaña al Equipo de Emergencias UNETE desarrollando las iniciativas vinculadas a comunicación para garantizar la visibilidad de las acciones establecidas en este plan. Las agencias, fondos y programas (AFPs) tienen la responsabilidad de difundir informaciones sobre las iniciativas que están llevando a cabo, y de manera especial el trabajo que se realiza en conjunto como Naciones Unidas y su vínculo con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara a 2030.

La crisis actual ha observado el fenómeno de *desinfodemia* que ha inundado a los medios de comunicación y las redes sociales con información falsa que cada día se multiplica en su alcance a nivel global. Las Naciones Unidas advierten de estas actividades delictivas e intensifican su lucha contra la proliferación de información falsa sobre el virus. En un estudio global reciente de la *Bruno Kessler Foundation*, se identificó que el 40% de publicaciones en redes son generadas por bots sociales (generación automática de data) y fuentes no confiables. Estas informaciones se propagan rápidamente y afectan el comportamiento y la toma de decisiones de las personas. Es importante aprovechar las plataformas existentes de las AFPs para que sean proveedores de información confiable para la población dominicana y contribuir a la lucha contra la desinformación.

La comunicación de riesgo toma en cuenta sobre todo las necesidades de información de los grupos poblacionales más vulnerables, que incluyen a las personas con discapacidad, personas envejecientes, personas de la comunidad LGBTI, mujeres (sobre todo embarazadas), niños, niñas y adolescentes, personas refugiadas y migrantes y personas que viven con VIH.

### Alianzas estratégicas y financiación para el desarrollo

Las alianzas estratégicas y los mecanismos de financiación para el desarrollo en el marco de la COVID-19 nos invitan a innovar y a repensar nuevos enfoques para garantizar nuestra capacidad para responder y esta crisis. El Sistema de las Naciones Unidas en el país cuenta con una Red Interagencial de Alianzas y Financiación para el Desarrollo (RIAFD), que es el espacio que coordina y acompaña los esfuerzos de transversalización, seguimiento, organización e implementación de las alianzas y el enfoque de financiación para el desarrollo conjunto e interagencial tanto interno como externo al SNU en el marco del MANUT y también de este Plan estratégico de respuesta al COVID-19.

En la situación actual la coordinación con los diferentes sectores de la sociedad civil, el sector privado, la academia y el sector público son cruciales para asegurar un buen análisis de la situación y la capacidad de llegar a las personas más vulnerables y a los lugares más remotos. El diálogo y la coordinación con el sector privado será fundamental para la recuperación económica con miras a un desarrollo sostenible e inclusivo, siendo uno de los actores clave para la movilización de recursos domésticos y establecimiento de alianzas multisectoriales.

Por igual, el Sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo vincula varias modalidades de financiación para canalizar rápidamente los fondos hacia intervenciones programáticas. Las nuevas modalidades, como los fondos agrupados, entre otros son puntos de partida. En este momento, también es de gran importancia la alianza que la ONU mantiene con las Instituciones Financieras Internacionales (IFI). Resulta de particular valor en las áreas de evaluaciones de impacto y análisis, financiación y movilización de recursos, abogacía para políticas de medidas macroeconómicas urgentes para brindar asistencia en el diseño y ejecución efectiva de programas y planificación a largo plazo.

Para asegurar un acompañamiento adecuado en respuesta a esta crisis, se han emprendido una serie de acciones que incluyen el mapeo de actores y alianzas clave, incluyendo al sector privado, la academia y la sociedad civil, así como la identificación de acciones y oportunidades prioritarias para estimular nuevas alianzas y reforzar y consolidar las ya existentes.

### Monitoreo del plan estratégico

El presente Plan de Respuesta es una estrategia con un marco temporal de 18 meses que abarca tanto la respuesta inmediata en el ámbito de la salud y otros sectores directamente impactados por la crisis, como la respuesta al impacto socioeconómico en el medio y largo plazo. En el mismo se han identificado y priorizado 3 objetivos estratégicos y sus intervenciones prioritarias con sus respectivos indicadores<sup>1</sup>. El presupuesto total de su ejecución se estima en unos USD 40, de los cuales USD 27,6 M se trata de fondos por movilizar.

Los indicadores del plan y sus respectivas metas están contenidos en los 8 planes sectoriales. La presente estrategia de seguimiento y monitoreo se basa en actualizar de forma periódica la ejecución presupuestaria y medir el progreso de los indicadores establecidos para definir el grado de avance sobre las metas. Este monitoreo se realizará a través de la plataforma **UNINFO**, lo que a su vez permitirá enlazar los avances de este plan con los indicadores del **Plan Global de la ONU para la Recuperación Social y Económica ante la COVID-19**. Con base en la información generada, los grupos sectoriales contarán con insumos para realizar los ajustes y acciones de gestión necesarias para lograr el cumplimiento de las metas, así como mejorar la efectividad de las intervenciones de respuesta y recuperación.

En vista de que los objetivos del plan se proyectan a corto, mediano y largo plazo, la presente estrategia contempla actualizar la ejecución presupuestaria y las brechas de financiamiento, así como monitorear los indicadores cada seis meses. Con la misma periodicidad serán elaborados reportes de ejecución presupuestaria y sobre el avance hacia las metas del plan. Dichos reportes en principio serán compartidos tanto internamente para efectos de ajuste programático como externamente para fines de comunicación y de rendición de cuentas.

---

1 Al momento de desarrollar el presente Plan, aún no se cuenta con los indicadores del Plan Global, por lo que se han incluido algunos indicadores de proceso que permitan hacer un seguimiento de forma preliminar. Sin embargo, una vez se hayan formulado los indicadores del Plan Global, los indicadores incluidos en este plan serán revisados y eventualmente sustituidos por aquellos indicadores globales que apliquen al caso.



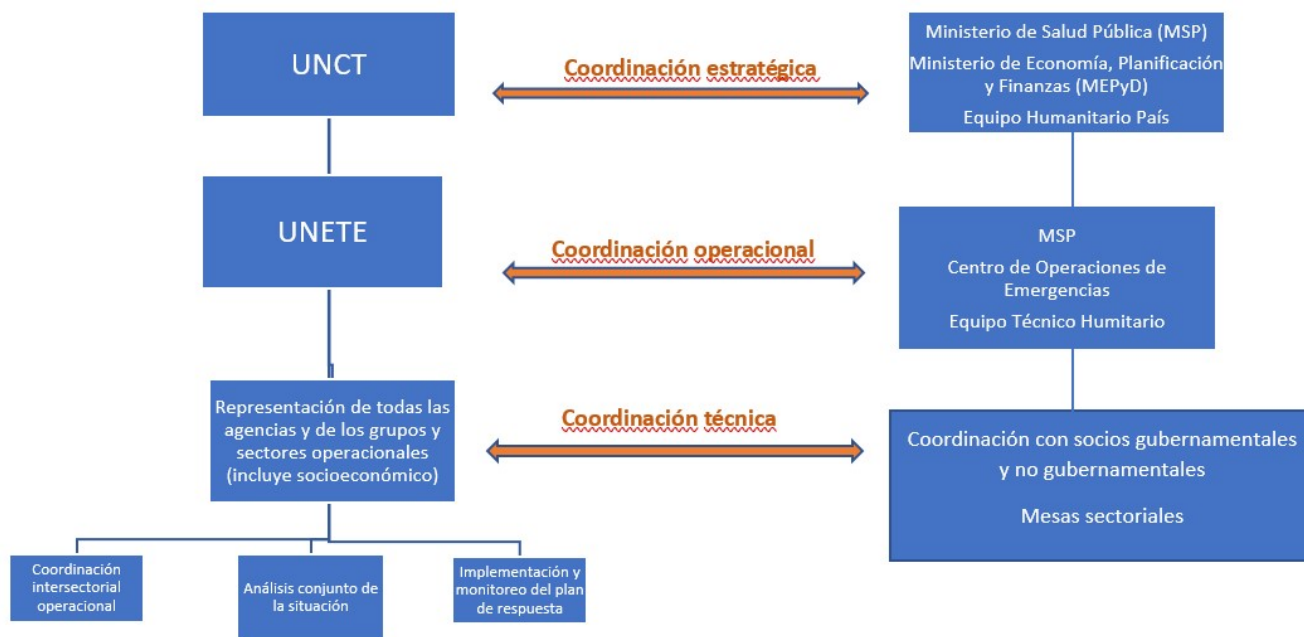
## 7. Mecanismos de coordinación de la respuesta

Con el fin de garantizar una respuesta coherente y coordinada del Sistema de Naciones Unidas, promoviendo el espíritu de la reforma, se establecieron los siguientes mecanismos de coordinación internos:

- Activación del Equipo de Respuesta a Emergencias del SNU en el país (UNETE)
- Se mantienen reuniones del UNCT cada dos semanas para asegurar el análisis conjunto y la toma de decisiones
- Adopción del enfoque sectorial en el seno del UNETE para facilitar la coordinación operacional, alineada con la estructura del Sistema de Gestión de Riesgos nacional, y desarrollar planes operaciones de respuesta y coordinar acciones
- Realización de informes de situación cada dos semanas para asegurar la consolidación de la información, para comunicar interna y externamente las acciones realizadas por las UN y para mantener un registro de las medidas adoptadas por el gobierno.
- Funcionamiento de los grupos interagenciales transversales tales como el Grupo Interagencial de Género, el Grupo Interagencial de Comunicación, el grupo de alianzas y el grupo de análisis socioeconómico

En cuanto a la coordinación externa, los espacios de coordinación son:

- Coordinación interagencial con las instituciones del estado responsables del sistema de protección social
- Coordinación permanente con los diferentes ministerios técnicos y, en concreto, con el Ministerio de Salud (OPS) y el de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), mandatados para coordinar la crisis sanitaria y a los actores de desarrollo y la Cooperación Internacional
- Activación del Equipo Humanitario País para asegurar un espacio de diálogo entre en Sistema de Naciones Unidas, los donantes humanitarios y las ONG nacionales e internacionales con mandato humanitario
- Coordinación y apoyo al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en su rol de responsable de la gestión de riesgos y la respuesta a emergencias en el país.



Mecanismos de Coordinación Sistema de NNUU

Coordinación con actores externos al Sistema de NNUU